

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Aprobado ACTA 214

Medellín, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

| | |
|-----------------------|---|
| PROCESO | Ordinario |
| DEMANDANTE | Magdalena de Jesús Loaiza Toro |
| DEMANDADO(S) | Colpensiones |
| RADICADO | 05001-31-05-014-2021-00171-01 (P 19923) |
| DECISIÓN | Confirma |
| MAGISTRADA PONENTE | Carmen Helena Castaño Cardona |

En la fecha, el **Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral**, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario promovido por **MAGDALENA DE JESÚS LOAIZA TORO EN CALIDAD DE CURADORA Y HERMANA DE LA SEÑORA LUZ MARINA LOAIZA TORO** contra **COLPENSIONES** con radicado **05001-31-05-014-2021-00171-01**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

I. ANTECEDENTES:

Pretensiones:

La demandante solicita se declare que a la señora **Luz Marina Loaiza Toro** como hija inválida, con dependencia económica de la señora **María Virgelina Toro de Loaiza**, le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes – sustitución pensional por el fallecimiento de su madre; y, en consecuencia se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes – sustitución pensional, desde el **14 de abril de 2019**, fecha del fallecimiento de la señora **María Virgelina Toro de Loaiza**, al pago del retroactivo de las mesadas pensionales tanto ordinarias como adicionales causadas desde el momento de la

muerte y hasta el día en que Colpensiones a través de fallo judicial reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes en el mes de enero de 2021, intereses moratorios desde el momento en que se causó la sustitución pensional, a la indexación, a las costas y lo ultra y extra petita que se logre probar.

Hechos:

Como fundamento de sus pretensiones expuso que la señora **Luz Marina Loaiza Toro** nació el 23 de marzo de 1953, hija de Alonso Antonio Loaiza Yepes y María Virgelina Toro de Loaiza (de quien dependía económicamente).

Informó que la señora **María Virgelina Toro de Loaiza y Luz Marina Loaiza Toro** vivieron bajo el mismo techo y que por la condición de invalidez de esta última dependía económicamente de su madre.

Señaló que la señora Loaiza Toro presenta síntomas desde los 14 años, con más de 10 hospitalizaciones previas, varios intentos de suicidio y se encuentra con controles con psiquiatría por síntomas maniacos y psicóticos crónicos, en ocasiones agresiva.

Según los diagnósticos que presenta, fue calificada con un 58,70% de pérdida de capacidad laboral por la Nueva EPS el **31 de agosto de 2011**

Mediante **Resolución N°1750 de 1982** el ISS reconoció una pensión de vejez a favor de **María Virgelina Toro de Loaiza**, quien falleció el **14 de abril de 2019**

Manifestó que mediante **auto N.º 555** del proceso ordinario con radicado 050013110007-2019-00438 del Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín, decretó la interdicción provisoria de la señora **Luz Marina Loaiza Toro** y la designó como curadora provisional.

El **17 de abril de 2019**, Colpensiones valoró la pérdida de capacidad laboral de la señora **Luz Marina Loaiza Toro** y determinó que esta ascendía a **60,10%**, estableciendo como fecha de estructuración el **27 de junio de 2019**, fecha de admisión de la interdicción judicial.

El **13 de agosto de 2020**, radicó petición ante Colpensiones solicitando el reconocimiento de la pensión sustitutiva como beneficiaria de su madre, misma que fue negada mediante resolución SUB 198493 del 17 de septiembre de 2020, arguyendo que no se cumplía con el requisito de la estructuración de pérdida de capacidad laboral antes de la fecha del fallecimiento del causante.

Mediante Resoluciones SUB-210624 del 1 de octubre y DPE 14169 del 19 de octubre, ambas de 2020, la demandada confirmó la decisión adoptada de negar el reconocimiento de pensión sustitutiva.

El Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín a través de la providencia del **18 de diciembre de 2020**, tuteló los derechos fundamentales de la señora **Luz Marina Loaiza Toro** y ordenó de manera transitoria el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, confirmado parcialmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 28 de enero de 2021, ordenando a Colpensiones la notificación de la Resolución SUB 278414 del 23 de diciembre de 2020.

La demandada a través de la **Resolución SUB-278414** del 23 de diciembre de 2020 y en cumplimiento del fallo judicial, reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de la pensionada María Virgelina Toro de Loaiza.

Contestaciones:

Colpensiones: indicó que se opone a la prosperidad de las pretensiones, al señalar que no acreditó los requisitos exigidos por la ley; además al consultar la nómina de pensionados se evidencia que a la señora LUZ MARINA LOAIZA TORO mediante resolución No. 278414 de 2020 se le concedió pensión de sobrevivientes pensionado-vejez registrando fecha de ingreso a nómina enero de 2021. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en aplicación de la condición más beneficiosa, improcedencia de los intereses moratorios, improcedencia de la indexación, compensación, descuentos del retroactivo por salud, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

Sentencia de primera instancia:

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **11 de julio de 2023**, declaró la **nulidad del Dictamen** de pérdida de capacidad laboral N°3694927 del 17/02/2020, por medio del cual Colpensiones determinó la fecha de estructuración del estado de invalidez de la señora Luz Marina Loaiza a partir del 27/06/2019. En su lugar declaró la legalidad del Dictamen PCL aportado con la demanda N°32499847-108 realizado el 29/03/2021 por la Junta Médico Laboral IPS S.A.S., que estableció su PCL en el 67%, con fecha de estructuración del 02/01/2014, por las razones expuestas en los considerandos de la presente decisión. Como consecuencia, condenó a Colpensiones a **reconocer y pagar de manera definitiva** en favor de la señora la señora Luz Marina Loaiza Toro la pensión de sobreviviente o sustitución pensional, de forma vitalicia, en calidad de hija en condición de invalidez con dependencia

económica de la pensionada fallecida María Virgelina Toro. Como **retroactivo pensional** causado del 14 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020 ordenó pagar la suma de \$21.012.064, así como a su indexación. Ordenó igualmente a la AFP continuar pagando la prestación económica a partir del 1° de agosto de 2023 en **cuantía del salario mínimo**, a razón de 14 mesadas al año y sin perjuicio de los incrementos y reajustes anuales a los que haya lugar. Autorizó a Colpensiones a reanalizar los **descuentos en salud**. Las **costas procesales** se impusieron a cargo de la demandada.

Consulta:

La decisión anterior no fue objeto de apelación por las partes, razón por la cual se remitió el expediente a este Tribunal para conocer del proceso en grado de consulta.

Alegatos:

Demandante: Solicita la confirmación de la sentencia por acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, toda vez que se demostró la condición de inválida.

II. CONSIDERACIONES:

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos para resolver en esta instancia de conformidad con el grado jurisdiccional de consulta será establecer: si la señora **Luz Marina Loaiza Toro** es beneficiaria de la sustitución pensional, en calidad de hija en condición de invalidez, en razón del fallecimiento de la pensionada **María Virgelina Toro De Loaiza** el 14 de abril de 2019.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La señora **Virgelina Toro de Loaiza** falleció el **14 de abril de 2019**, según consta en el Registro civil de Defunción (04/Pág. 4)
2. La señora **Luz Marina Toro Loaiza** es hija de la causante Virgelina Toro Montoya y Alonso Antonio Loaiza Yepes, según consta en el Registro de Nacimiento. (04/Pág. 5)

3. El Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín, mediante **auto interlocutorio N.º 555 del 27 de junio de 2019** admitió solicitud de decreto de interdicción judicial de persona por discapacidad mental absoluta de Luz Marina Loaiza Toro, decretando la interdicción provisoria y asignando a la señora **Magdalena de Jesús Loaiza Toro**, en calidad de hermana, como su curadora provisoria. (04/Págs. 8-9)
4. **Declaraciones extra-proceso** de N.º 858 y 859 en la Notaria Tercera de Medellín, de fecha **9 de junio de 2020**, realizado por las señoras Amalia Lucía García Gómez, Mauri Mercedes del Socorro Sánchez Botero y Dora Elisabed Ocampo en el que se lee lo siguiente: *“manifestamos en calidad de vecinas que conocemos de vista, trato, comunicación a la señora LUZ MARINA LOAIZA TORO (...) y dependía económicamente de la señora MARIA VIRGELINA TORO DE LOAIZA (...), siendo ella que era la mamá quien le ayudaba en todo lo necesario para sus gastos, toda vez que la señora LUZ MARINA LOAIZA TORO, sufría de ESQUIZOFRENIA Y BIPOLARIDAD desde los 14 años, por esta razón nunca ha trabajado en ninguna compañía ni ha recibido ingresos, ni pensión, tampoco ayudas del gobierno (...)”* (04/Págs. 10-15)
5. A través del **Dictamen de Determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral** N.º 32499847-108 expedida por la Junta Médico Laboral IPS de Calificación Reintegro Laboral, de fecha **29 de marzo de 2021**, se determinó una pérdida de capacidad laboral del 67% con fecha de estructuración del **2 de enero de 2014**, *ya que desde entonces se documenta ingresos frecuentes con antecedentes de adicción a PSA con evolución al deterioro.* (05/Págs. 1-5)
6. **Historia Clínica** expedida por el **Hospital Mental de Antioquia**, en el que se evidencia que la señora **Luz Marina Toro Loaiza** ha venido presentando diversas patologías desde mayo de 1972 (06/Págs. 1-15)
7. **Calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional** N.º 3694927 expedido por **Colpensiones** el **17 de abril de 2020**, en el que se determina un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 60.10% con fecha de estructuración del **27 de junio de 2019**, que corresponde a la fecha de admisión de la interdicción judicial. (09/Págs. 1-8)
8. **Concepto de Rehabilitación** expedido por la Nueva EPS en **marzo de 2019** en el que se lee: *“trastorno afectivo, bipolar, discapacidad intelectual leve (...) el trastorno bipolar no tiene cura, solo tratamiento de mantenimiento y a pesar de esto tiene síntomas afectivos y psicóticos crónicos. (...) probablemente no se logre reubicar en otra labor en el futuro (...) recuperación funcional cuando termine el tratamiento pendiente: malo”.* (08/Págs. 1-2)

9. Petición radicada en Colpensiones el 17 de diciembre de 2019 a fin de solicitar la calificación de pérdida del estado de invalidez de la señora Luz Marina Loaiza Toro, calificada por la Nueva EPS el 19 de agosto de 2011. (08/Págs. 3-7)
10. **Resolución SUB-198493** expedida por Colpensiones el **17 de septiembre de 2020** mediante el cual se niega el reconocimiento de la pensión de sobreviviente con ocasión al fallecimiento de Toro de Loaiza María Virgelina arguyendo *“la declaratoria de invalidez es posterior al fallecimiento del causante ocurrido el 14 de abril de 2019, razón por la que se desvirtúa la dependencia económica entre el solicitante y el causante, ya que debe demostrarse la dependencia al momento del fallecimiento y conforme a la estructuración que es el 27 de junio de 2019.”* (10/Págs. 1-5)
11. **Resoluciones SUB-210624** del 1 de octubre de 2020 y **DPE 14169** del 19 de octubre de 2020, mediante el cual se resuelven los recursos de reposición y apelación, confirmando la resolución SUB-198493 del 17 de septiembre de 2020. (12-13)
12. Fallo de tutela del **18 de diciembre de 2020**, del Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante el cual se *“ordena a Colpensiones de manera transitoria, proceda a reconocer a la señora Luz Marina Loaiza Toro, la pensión de sobrevivientes, orden que permanecerá vigente solo durante el termino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por la afectada”*, fallo confirmado parcialmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia el **28 de enero de 2021** en el que ordena a Colpensiones notificar a la parte actora la Resolución SUB 278414 del 23 de diciembre de 2020. (14/15)
13. **Resolución SUB-278414** del **23 de diciembre de 2020** expedido por Colpensiones mediante el cual da cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín del 18 de diciembre de 2020, y reconoce el pago de la pensión de sobreviviente con ocasión al fallecimiento de la pensionada Toro de Loaiza María Virgelina. (16/Págs.1-13)
14. Reconocimiento de pensión de vejez a la señora María Virgelina Toro de Loaiza por parte del ISS, hoy Colpensiones desde el año 1982. (CC-21316745/GRP-HPE-EV-CC-21316745-1)

Efectuada la anterior anotación procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento.

i) Pensión de sobrevivientes. Calidad de beneficiaria

la señora María Virgelina Toro de Loaiza, gozaba de una pensión de vejez, la cual fue reconocida en cumplimiento de todos los requisitos legales y otorgados desde el año 1982, por el otrora ISS hoy COLPENSIONES.

Atendiendo a la fecha del fallecimiento de la causante, esto es, 14 de abril de 2019, la normatividad aplicable es la consagrada en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, la cual reza que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes “*c. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993*”

Sobre la calidad de beneficiaria de la demandante, la norma trae varias condiciones a cumplir: a) ser hija; b) ser inválida en los términos del artículo 38 de la ley 100 de 1993; y, c) depender económicamente de la causante.

a. Parentesco

No hay duda que la señora Luz Marina Toro Loaiza es hija de la causante como consta en el registro civil de nacimiento que reposa en el expediente digital (04/Pág. 5)

b. El estado de invalidez

Al expediente fueron incorporados dos dictámenes con los que se calificó la merma de capacidad laboral de la señora Toro Loaiza. Ellos son:

- **Dictamen de Calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional** N.º 3694927 expedido por Colpensiones el **17 de abril de 2020**, en el que se determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del **60.10%** discriminado así: valor final de la deficiencia 32, valor final rol laboral, ocupacional y otras áreas ocupacionales 28,10. Fecha de estructuración del **27 de junio de 2019**. (09/Págs. 1-8)
- **Dictamen de Determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral** N.º 32499847-108 expedida por la Junta Medico Laboral IPS de Calificación Reintegro Laboral, de fecha **29 de marzo de 2021**, se determinó una pérdida de capacidad laboral del **67%**, discriminado así: valor final de la deficiencia 32, valor final rol laboral, ocupacional y

otras áreas ocupacionales 35. Fecha de estructuración del **2 de enero de 2014**. (05/Págs. 1-5)

Ahora bien, el artículo 41 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del decreto 19 de 2012 señala que la calificación del estado de invalidez será determinado con base en el *manual único para la calificación de invalidez* vigente a la fecha de calificación, y que le corresponde a Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las Compañías de Seguros, y a las Entidades Promotoras de Salud, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias.

De igual forma expresa dicho artículo que en caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los 10 días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los 5 días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de 5 días. Por último, señala que contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

Por otro lado, la Corte Constitucional a través de sentencia C-120 de 2020, al declarar exequible el segundo inciso del artículo 142 del decreto 19 de 2012, fue clara en manifestar que existen dos eventuales procedimientos para controvertir los dictámenes, uno administrativo y otro judicial, siendo este último posterior, teniendo en cuenta que existe una capacidad institucional en donde se confía a expertos la calificación de la capacidad laboral, siempre fundada en criterios objetivos.

Sobre la carga de la prueba, le corresponde a la parte demandante demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y a los demandados los hechos en que finca la excepción. De tal manera que, conforme al principio de las cargas probatorias, cada parte deberá allegar al proceso los elementos pertinentes que permitan al operario judicial formarse la convicción necesaria para demostrar los presupuestos fácticos que harían prosperar su pretensión o excepción según el caso.

En lo que se refiere al valor probatorio que se le debe dar a los peritajes, esta Sala en varias oportunidades ha manifestado que la prueba pericial es un medio probatorio en virtud del cual una persona ajena al proceso, con conocimientos especializados o técnicos, los aporta para que el juez pueda valorar mejor la naturaleza de los elementos a demostrar, sin olvidar que dicha prueba debe referirse a conceptos, juicios y máximas de experiencia de un saber especializado; sin embargo, no se puede pasar por alto que el juez está facultado para apreciar esa prueba o alejarse de la misma si lo considera necesario.

Asimismo, conforme al principio de libre formación del convencimiento establecido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez puede apreciar libremente los elementos probatorios para formar su convicción acerca de los hechos controvertidos, con fundamento en las pruebas que más los induzcan a hallar la verdad.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2082-2022, señaló que, si bien la prueba que podría considerarse como idónea para determinar la pérdida de capacidad laboral son los dictámenes emitidos por las entidades facultadas para ello, no se puede desconocer que el juez puede formar su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba. Al respecto dijo la corporación:

“Con fundamento en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, la prueba idónea para determinar el grado de invalidez y el origen de las contingencias de una persona corresponde, en primera oportunidad, al otrora Instituto de Seguros Sociales, a Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Empresas Promotoras de Salud, con la posibilidad de que en caso de desacuerdo acudan a las juntas de calificación de invalidez.

Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que aun cuando la prueba idónea para determinar el estado y porcentaje de pérdida de capacidad laboral de una persona es el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez, así como, por los organismos arriba citados, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 27 jun. 2002. Rad. 17999, CSJ SL, 29 jun. 2003, rad. 20558, CSJ SL 24 sep. 2003, rad. 21113), también ha reconocido que el juez puede formar su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, sin que la circunstancia de que acuda a unos medios de convicción con preferencia sobre otros, pueda considerarse como un yerro de apreciación, pues así lo reconoce el principio de libertad probatoria previsto en el artículo 61 del CPTSS.”

Ahora, en relación a la valoración de los dictámenes que se pretenden hacer valor en juicio, advirtió la Corte en sentencia SL1035-2022 que se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tal como lo disponen los artículos 226 a 235 del Código General del Proceso:

“Huelga precisar que a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, las partes deben aportar al proceso el dictamen que pretendan hacer valer en su favor en las oportunidades para solicitar la práctica de pruebas y la contradicción se surte en audiencia pública y/o mediante la aducción de otra experticia, y el juez los apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tal como lo disponen los artículos 226 a 235 del CGP, aplicables al proceso laboral por así disponerlo el canon 145 del CPTSS.”

Así las cosas, el juzgado del conocimiento declaró la nulidad del dictamen emitido por Colpensiones, arguyendo que no coincide con los argumentos dados por la entidad al fijar como fecha de estructuración el 27 de junio de 2019, al ser la fecha de admisión de la demanda de interdicción. Adujo además que existe suficiente material probatorio que permitía inferir que la señora Toro Loaiza presenta diversas patologías desde muy temprana edad con continuos

tratamientos psiquiátricos. Concluyó que el dictamen emitido por la Junta Médico Laboral IPS de Calificación Reintegro Laboral, es la que se ajusta a la realidad del deterioro sufrido por la paciente, teniendo en cuenta los conceptos del doctor Juan Guillermo Ocampo Olarte, perito llamado a rendir informe en el proceso, quien lo mantuvo incólume, declarando como consecuencia inválida a la demandante.

Una vez analizada la prueba en conjunto, se observa que le asiste razón al juez de conocimiento al declarar la nulidad del dictamen expedido por Colpensiones, entidad que fijó como fecha de estructuración el **27 de junio de 2019**, al ser el día de solicitud de interdicción judicial, sin que frente a ello se hayan válido de los padecimientos médicos de la solicitante. De otro lado, al analizar el dictamen expedido por la Junta Médico Laboral IPS de Calificación Reintegro Laboral, que le otorga a la demandante una pérdida de capacidad laboral del 67%, se extraen suficientes evidencias científicas que permitan formar a esta Sala el convencimiento de su estructuración de invalidez desde el **2 de enero de 2014**.

Al analizar los documentos allegados al plenario, se observa que, según la Historia Clínica del Hospital Mental de Antioquia, la paciente ha venido presentado patologías desde mayo de 1972 (06/Págs. 1-15), además de la historia clínica allegada se evidencia las hospitalizaciones y descripción de los trastornos mentales padecidos por la señora Loaiza Toro (07/Págs. 1-20). De otro lado, en el **concepto de rehabilitación** expedido por la Nueva EPS, en **marzo de 2019** se lee: *“trastorno afectivo, bipolar, discapacidad intelectual leve (...) el trastorno bipolar no tiene cura, solo tratamiento de mantenimiento y a pesar de esto tiene síntomas afectivos y psicóticos crónicos. (...) probablemente no se logre reubicar en otra labor en el futuro (...) recuperación funcional cuando termine el tratamiento pendiente: malo”*. (08/Págs. 1-2)

Asimismo, en la ponencia del médico Juan Guillermo Ocampo Olarte, quien emitió el concepto de pérdida de capacidad laboral de la Junta Médico Laboral IPS, rindió interrogatorio en la audiencia de práctica de pruebas, manifestando que: *“teniendo en cuenta la historia y evolución de la enfermedad y considerando que desde enero de 2014 y de allí en adelante presenta múltiples hospitalizaciones, se puede considerar que en ese momento la persona tenía una desmejora de su situación de salud (...) se determina que a partir de enero de 2014, en adelante ya es una persona que había alcanzado un estado de deficiencia mental sin posibilidad de recuperación según se evidencia en la evolución natural de su enfermedad en la historia aportada (...) El fondo de pensiones se basó en un documento jurídico para fijar la fecha de estructuración que podría tener validez en caso de que no existiera documentación médica años atrás, pero yo lo sustente en la documentación clínica que se aportó”*.

Ahora bien, el artículo 3º del Decreto 1507 de 2014 determina la manera como debe declararse la fecha en que acaeció de manera permanente y definitiva la pérdida de la capacidad laboral. De allí que deba realizarse un análisis integral de la historia clínica, de los exámenes clínicos, de reportes, de las valoraciones periódicas y en general toda aquella prueba que pueda servir para establecer una

determinada relación causal a la hora de determinar la pérdida de capacidad laboral y su fecha de estructuración.

En ese sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que una persona es considerada “*inválida*” “(...) desde el día en que le sea imposible procurarse los medios económicos de subsistencia”, situación que no puede ser ajena a la valoración probatoria integral que deben realizar los expertos. Así las cosas, es razonable exigir la valoración integral de todos los aspectos clínicos y laborales que rodean al calificado, al momento de establecer la fecha de estructuración de la invalidez, debido al impacto que tal decisión tiene sobre el derecho a la seguridad social, lo que determina su relevancia constitucional. (Sentencia T-220 de 2022)

Del mismo modo, no se puede pasar por alto lo establecido en el artículo 232 del Código General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual establece que “*El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso*”.

Coralario de todo lo dicho, existen elementos de juicios suficientes, técnicos y científicos que permiten formar el convencimiento de esta Sala del Tribunal para considerar que el dictamen elaborado por la Junta Medico Laboral IPS de Calificación Reintegro Laboral, se ajusta a la realidad médica de la demandante, concluyéndose que esta última cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 67 % de origen común, con una fecha de estructuración del 2 de enero de 2014.

c. Dependencia económica

Ahora, en lo que respecta a la condición de ***dependencia*** de la señora **Luz Marina Toro Loaiza** con la pensionada fallecida, se realizó un análisis del interrogatorio de parte, los testigos traídos al proceso y la prueba documental aportada, pudiéndose concluir lo siguiente:

En lo que se refiere al interrogatorio de parte realizado a la señora **Magdalena de Jesús Loaiza Toro**, hermana y curadora de **Luz Marina Toro Loaiza**, manifestó que su hermana siempre había dependido económicamente de su madre, la señora **María Virgelina Toro de Loaiza**, que no recibe ningún subsidio del Estado y que no tiene ningún familiar que le colabore económicamente.

En la parte documental, obra en el expediente declaraciones extra proceso N° 858 y 859, de fecha 9 de junio de 2020 de las señoras **Amalia Lucía García Gómez**, **Mauri Mercedes del Socorro Sánchez Botero** y **Dora Elisabed**

Ocampo, mediante el cual expresaron lo siguiente: “*manifestamos en calidad de vecinas que conocemos de vista, trato, comunicación a la señora LUZ MARINA LOAIZA TORO (...) y dependía económicamente de la señora MARIA VIRGELINA TORO DE LOAIZA (...), siendo ella que era la mamá quien le ayudaba en todo lo necesario para sus gastos, toda vez que la señora LUZ MARINA LOAIZA TORO, sufría de ESQUIZOFRENIA Y BIPOLARIDAD desde los 14 años, por esta razón nunca ha trabajado en ninguna compañía ni ha recibido ingresos, ni pensión, tampoco ayudas del gobierno (...)*” (04/Págs. 10-15), información que fue corroborada en las declaraciones dadas en audiencia por **Mauri Mercedes del Socorro Sánchez Botero y Amalia Lucía García Gómez**, donde ambas dieron fe de las hospitalizaciones y padecimientos mentales sufridos por la actora durante toda su vida, hecho que le impidió tener una vida laboral activa; además informaron la dependencia económica que tenía la señora Loaiza Toro con su madre.

Pues bien, en el presente asunto, de un análisis en conjunto de la prueba allegada al plenario se puede concluir que los testigos que son unánimes, así como la documental, las cuales dan certeza y claridad a la Sala para poder confirmar que la demandante dependía económicamente de su madre hasta el día de la muerte de esta última el **14 de abril de 2019**, a razón de las patologías sufridas por aquella; por lo que se encuentra plenamente acreditado el requisito que exige la norma de la dependencia económica con la causante.

Así pues, debe señalarse que, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le brinden convicción. Así pues, en el presente caso, el juez como director del proceso puede apreciar y valorar con un criterio de conciencia cualquier prueba decretada dentro del proceso, como ya se dijo, según las reglas de la sana crítica.

Teniendo en cuenta lo razonamientos anteriores y lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL10118-2015, el juzgador fundamentará su decisión en los elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico.

Corolario de todo lo dicho, se **CONFIRMARÁ** la sentencia en tal sentido, debido a que la demandante acreditó la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

ii) Retroactivo pensional

Atendiendo a que a la demandante le viene siendo reconocida la prestación económica de sobreviviente desde el 1° de enero de 2021, esta Sala procedió a calcular el retroactivo adeudado del 14 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020; pero se encuentra una diferencia levemente superior a la dada por el *a-quo*, pues la arrojada por esta Sala ascendió a \$21.039.116, mientras que la hecha en primera instancia obedeció a \$21.012.064, no obstante, al no ser este un punto objeto de apelación, se **CONFIRMARÁ** la liquidación realizada por el juez de conocimiento.

Con relación a la indexación de las condenas, es de advertir que los efectos de la inflación son quizá más significativos en el campo laboral y de la seguridad social, dado el carácter alimentario de las prestaciones que el empleador o la entidad de seguridad social debe al trabajador o pensionado, y por lo tanto la doctrina y la jurisprudencia acuden a la corrección monetaria con el fin de procurar que el pago de lo debido sea cabal, íntegro o completo, o dicho en otros términos que el deudor cubra la prestación en su valor real. Por lo tal razón es procedente la orden de indexar las mesadas pensionales objeto de esta sentencia, con base en la certificación mensual del Índice de Precios al Consumidor –IPC–, expedida por el DANE, entre la causación de cada mesada y hasta el momento efectivo del pago.

iii) Costas procesales

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. En la segunda instancia no se causaron por haberse conocido del asunto en grado de consulta.

III. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la **Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el **11 de julio de 2023**, en el proceso ordinario adelantado por **MAGDALENA DE JESÚS LOAIZA TORO EN CALIDAD DE CURADORA Y HERMANA DE LA SEÑORA LUZ MARINA LOAIZA TORO** contra **COLPENSIONES**

SEGUNDO: Las costas procesales quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ


ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ